

**VI Coloquio Servicio Público-Gestión Privada
La política de las telecomunicaciones en Cataluña: retos en las infraestructuras y la gestión del servicio**

Barcelona, 23 de octubre de 2006

RESUMEN DE LA JORNADA

El VI Coloquio Servicio Público-Gestión Privada organizado por el Centro Sector Público-Sector Privado (Centro SP-SP) del IESE reunió a más de sesenta profesionales del sector de las telecomunicaciones para hablar sobre "La política de las telecomunicaciones en Cataluña: retos en las infraestructuras y la gestión del servicio". La actividad se celebró el 23 de octubre en la Casa Llotja de Mar, sede de la Cambra de Comerç de Barcelona.

La liberalización del sector de las telecomunicaciones en España se inició en el año 1998. Desde entonces, el sector se ha desarrollado en un marco regulatorio que debía facilitar la transición del monopolio a la competencia. Sin embargo, todavía se debate cuál debe ser el papel del sector público y del privado, y la necesidad de regulación. Durante la jornada, todos los ponentes coincidieron en que actualmente existe una brecha digital en España a la que es necesario hacer frente. Y también se resaltó que las políticas de telecomunicaciones deben basarse en la realidad y no sólo en fundamentos teóricos.



© Gabriel Cazado

* * *

SESIÓN DE APERTURA

En la inauguración participaron Miquel Valls, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona; Carlos Cavallé, antiguo director general del IESE y presidente del Centro SP-SP, y Joan Ignasi Grau, director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya.



© Gabriel Cazado

Carlos Cavallé, presidente del Centro SP-SP inició la jornada refiriéndose al proceso de globalización actual que vivimos, que afecta tanto a las nuevas tecnologías como a los procesos de desregulación. Esta situación provoca grandes cambios como fusiones, desinversiones y adquisiciones, que hacen que el sector se reestructure y conducen a un proceso de búsqueda de convergencia y de nuevas estrategias.

Estos cambios también hacen que el mercado cambie. Por ejemplo, el gasto en telecomunicaciones en el presupuesto familiar está aumentando, mientras el gasto en otros ámbitos, como el de la restauración, disminuye.

El usuario está deseando invertir en telecomunicaciones (especialmente en paquetes de servicio: voz y datos, telefonía fija y móvil, telecomunicaciones e imagen...) siempre que tenga un buen precio y un lugar a dónde reclamar en caso de que lo necesite.

Ante una realidad cambiante, Cavallé recordó que hay que redefinir las competencias del sector público y del privado, y también de las Autonomías. "Hay que poner orden en esta situación de desregularización", añadió.

Miquel Valls, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, destacó la importante relación entre el sector público y el privado en todas las áreas, pero en especial en el ámbito de las telecomunicaciones. Explicó que los gobiernos, incluso los liberales, tienen tendencia a intervenir y regular este ámbito porque supone un intercambio de datos e información. Desde la Cambra de Comerç de Barcelona, apuntó Valls, se defiende la libertad, o al menos el equilibrio entre regulación y libertad para no caer en la pérdida de competitividad y productividad. La libertad de las empresas en la economía liberal se fundamenta en la libertad de crecer y actuar, por eso la Administración ha de tener claro su papel y dejar suficiente autonomía.



© Gabriel Cazado



© Gabriel Cazado

Joan Ignasi Grau, de la Generalitat de Catalunya, resaltó la dificultad de encontrar el equilibrio entre regulación y empresa, e insistió en la necesidad de dialogar: "encuentros como este coloquio son un primer paso". Según el director del Centro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat, la situación actual se enmarca en una sociedad del conocimiento que afecta a los ciudadanos y en un proceso de convergencia de empresas, de tecnologías (la tecnología móvil ahora incluye datos, voz y pronto televisión) y del sector (como demuestra la compra de

YouTube por parte de Google).

Grau apuntó que "todavía estamos muy al principio de esta curva de telecomunicaciones y tenemos un déficit en infraestructuras de cara al futuro si queremos salvar las brechas de territorio y de tecnologías y no perder competitividad".

Para tener una sociedad de conocimiento avanzada, Grau aseguró que lo esencial es “dialogar más, que los reguladores regulen encontrando el equilibrio y que las Administraciones demos un paso más allá. Las telecomunicaciones son un servicio universal que hemos de garantizar a ciudadanos y empresas”. Para garantizarlo, la Generalitat tiene dos proyectos en curso: “Banda ancha rural”, para llegar al territorio rural; y “Xarxa oberta”, para garantizar el acceso de las empresas a la banda ancha.

IMPULSANDO LAS INFRAESTRUCTURAS DE TIC EN CATALUÑA

La primera mesa redonda se centró en “el impulso de las infraestructuras de TIC en Cataluña” y contó con las intervenciones de Kim Faura, director general de Telefónica de Cataluña; Josep Grau, vicepresidente de DOXA Consulting; Tobías Martínez, director general de Abertis Telecom y Jordi Pericàs, secretario general del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

Moderó la sesión **Joaquím Triadú**, vicepresidente del Centro SP-SP y socio de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, que destacó la importancia de los árbitros en los casos de competencia y se refirió a los nuevos árbitros de contenidos, como el CAC, cada vez más presentes.



© Gabriel Cazado

De izquierda a derecha, Pericàs, Faura, Triadú, Grau-Soldevila y Martínez.

Kim Faura, director general de Telefónica de Cataluña, explicó que es necesario impulsar las infraestructuras de telecomunicaciones porque actúan como palanca de transformación de la economía y la sociedad. Si se analiza el PIB per cápita en relación con el índice eReadiness, que mide el desarrollo de la sociedad de la información, se aprecia una correlación entre el desarrollo de la sociedad de la información y la prosperidad. En contra de lo que pueda parecer, apuntó, el principal inhibidor en Cataluña no es la carencia de infraestructuras en telecomunicaciones sino la insuficiente percepción de su utilidad. “La auténtica fractura digital –puntualizó Faura– es que muchas personas no perciben la utilidad de las TIC ni sus beneficios, por eso hay que invertir en infraestructuras pero también es necesario incidir en la percepción de su utilidad”. Éste el principal cuello de botella del sector, puesto que de nada sirven las infraestructuras si no se saben usar.

Actualmente, en redes fijas, Telefónica puede ofrecer fibra óptica de 1 a 8 megabytes al 95% de la población. Como planes inmediatos tienen la activación de los más de 340.000 km de fibra óptica que hay en Cataluña y construir nodos para que se alcancen los 20-50 megas para particulares y un gigabyte para empresas. Faura aseguró que, en las zonas de cierta densidad de población y actividad económica, ningún proyecto estratégico está limitado por deficiencias en las infraestructuras. Y en las zonas en las que las condiciones de mercado en competencia no hacen viable una inversión totalmente privada, es necesario un planteamiento concertado, ejemplo del cual es el Plan Banda Ancha Rural al que Joan Ignasi Grau se refirió en la sesión inaugural.

La industria de telefonía móvil, explicó Faura, es el mayor empleador de la Europa de los 15, con 2,8 millones de empleos creados directa o indirectamente. Durante el 2004, la industria de la telefonía móvil generó un 1,1% del PIB de la Europa de los 15. En el caso concreto de España, los ingresos generados por operadores de telefonía móvil supusieron un 1,2% del PIB en el año 2005.

Las redes móviles constituyen el soporte esencial sobre el que se prestan los servicios de comunicaciones y por ello estas redes necesitan una continua adaptación tecnológica, para hacer posible servicios con mejores prestaciones. Sin embargo, actualmente existe una precariedad de la red, consecuencia de las trabas administrativas del despliegue como ordenanzas muy restrictivas, moratorias, tramitaciones de 16 meses una vez obtenido el permiso para instalar nuevas antenas... Tampoco ayuda a esta situación la judicialización de los conflictos, que genera retrasos y costes que podrían evitarse y dificulta que se dé un marco óptimo para una solución constructiva. Llegados a este punto, Faura reconoció que los operadores "lo hemos hecho mal al principio, abusando de la carencia de regulación y poniendo antenas por todos los sitios".

El director general de Telefónica concluyó que dar prioridad a las políticas de infraestructuras sobre las de aprovechamiento de las telecomunicaciones genera efectos secundarios negativos. Se refirió al ranking de ciudades de Cushman & Wakefield, en el que Barcelona aparece en el 4º lugar de ciudades europeas, en cuanto a nivel de vida, pero desciende hasta el lugar 19 en cuanto a la percepción de la gente del nivel de telecomunicaciones.

Las propuestas de cara al futuro son objetivar el estado de desarrollo de las infraestructuras públicas y privadas de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles; establecer mecanismos abiertos y transparentes de concertación público-privada que garanticen la evolución deseable de las infraestructuras de TIC en Cataluña y vincular explícitamente las políticas públicas a objetivos concretos de crecimiento económico y de calidad de vida de los ciudadanos.

Josep Grau-Soldevila, vicepresidente de DOXA Consulting, comenzó apuntando que las TIC han contribuido en gran medida al crecimiento económico, tal y como demuestra un análisis de la relación entre PIB per cápita y el gasto de TIC per cápita. En esta comparativa, España aparece por debajo de países como Italia, Alemania, Francia o Suecia. En el caso concreto de Cataluña, Grau explicó que se trata una economía de servicios (supone el 66% del PIB) y de microempresas (empresas de menos de 10 empleados) y señaló que las PYMES invierten "sólo 18.000 euros anuales en la mejora de las TIC".

Por otra parte, añadió Grau, la conectividad, y en especial la banda ancha, es el parámetro que mejor indica el nivel de evolución de la sociedad de la información. En España existe todavía un déficit importante en Internet respecto a la media europea.

Además, la existencia de una competencia real de infraestructuras y servicios favorece la penetración de los servicios de banda ancha y la competencia sólo se consigue con la diversidad de redes y de plataformas de contenidos. En lugares donde hay 2 o más operadores de cable, la penetración alcanza el 37% mientras que si sólo opera Telefónica, ésta se reduce al 25%.

La última parte de la presentación se centró en los agentes del sector: operadores, reguladores y Administración pública. En cuanto a los operadores, Grau comentó que en las redes fijas, el objetivo es invertir en redes de acceso, y puntualizó que el acceso por bucle está limitando la inversión en nuevas redes. En las redes móviles, se persigue la compartición para evitar la triplicación de redes que se ha producido hasta ahora. En España, añadió Grau, no se usa eficientemente el roaming rural. Respecto al agente regulador, recomendó que tenga una posición más vigilante. Refiriéndose a la intervención del director del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, Josep Grau sugirió "universalizar el servicio y no hablar de servicio universal, y para ello hay que invertir en redes".

En cuanto a la Administración pública, recordó que su acción ha de ser armonizadora, complementando las deficiencias del mercado (en cobertura, calidad, formación de usuarios...) en los servicios que se consideren básicos, como debe ser el de banda ancha. En este sentido, la acción de la administración debe centrarse en las zonas no rentables para los operadores y buscar fórmulas mixtas de financiación calculando muy bien la demanda real. Además, tiene que fomentar la relación electrónica con ciudadanos y empresas y formar a los usuarios incentivando así el uso de las TIC. Y en este ejercicio de fomento de las TIC, es importante incentivar también el uso por parte de PYMES a través de la contratación pública y de la formación.

Grau cerró su intervención centrando el debate en la iniciativa pública versus la privada y lanzó varias cuestiones: ¿acción pública subsidiaria o agente del mercado?; ¿regulación o desregulación? y ¿forzar la competencia o permitir el desarrollo natural que impone la dinámica de mercado?.

Tobías Martínez, director general de Abertis Telecom, se centró en el papel de los operadores como Abertis, empresa que dirige. "El operador de infraestructuras es la figura que gestiona de forma independiente y especializada las infraestructuras de telecomunicaciones y ofrece servicios de implantación, gestión, operación y mantenimiento de la red de forma compartida", dijo, y su aparición se debe al final del monopolio de operadores y redes.

El operador de infraestructuras dinamiza el mercado, facilitando la llegada de nuevos operadores; desarrolla la sociedad de la información; contribuye a un despliegue eficiente, ya que externaliza actividades alejadas del *corebusiness* de la empresa; ayuda a compartir las infraestructuras; contribuye al desarrollo tecnológico, dado que tiene un conocimiento especializado y experiencia en implantación de nuevas tecnologías; y ayuda en la operación y el mantenimiento de la infraestructura.



© Gabriel Cazado

En la base de la pirámide de servicios de un operador de infraestructuras de comunicaciones debe estar la operación y mantenimiento integral de la infraestructura, explicó Martínez, seguida de la gestión global del servicio de compartición de las infraestructuras; la implantación de red y, por último, los servicios avanzados, que es lo que tangibiliza el usuario.

La implantación de la TDT es un ejemplo de desarrollo e implantación tecnológico y puede ser, además, una puerta de entrada a la sociedad de la información para muchos ciudadanos, a través de aplicaciones como el DNI electrónico o la T-Administración. Nuevos retos de futuro son el *push video*, los decodificadores con disco duro donde se puede descargar la programación que interesa, los eventos pay per view o la interacción avanzada.

Martínez pidió al nuevo Govern y al nuevo Estatut un relanzamiento tanto de la economía catalana como de la competitividad e inversión en infraestructura con un pacto a largo plazo; el fomento del despliegue y la compartición de infraestructuras, y el impulso de la transición audiovisual hacia la TDT como uno de los ejes de entrada a la sociedad de la información.

Jordi Pericàs, secretario general del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), aportó el punto de vista del sector público, en una mesa en la que dijo haber notado "un desequilibrio" entre ambos sectores. Destacó que el tráfico audiovisual supone el 70 % del tráfico de banda ancha en España y apuntó que el audiovisual es la aplicación que justifica la banda ancha. La situación actual, explicó, está marcada por la convergencia hacia un modelo IP que lleva al uso de una única red y por la búsqueda del equilibrio territorial para conseguir que convivan el desarrollo tecnológico, la calidad de vida y el respeto con el entorno.

Según Pericàs, la inversión en infraestructuras no debe depender sólo de los operadores, sino que la Administración debe asumir el liderazgo. Y lo esencial es garantizar el equilibrio, ya que una intervención no cuidada del sector público puede afectar al sector privado, alertó.

En el turno de preguntas, Faura recalcó que cuando habla de fractura digital se refiere a ese 60% de personas que no saben usar ordenadores ni perciben los beneficios de las tecnologías de la información. Añadió que es cierto que donde hay más competencia hay más consumo, pero puntualizó que la competencia va a donde hay mercado, no a donde no lo hay.

Josep Grau insitió en la relación directa que hay entre infraestructuras y acceso a internet y señaló que en los lugares donde hay varios operadores con red propia éstos pueden dar servicios diferentes a los de Telefónica y ofrecer mejores precios, hechos que contribuyen a que el acceso sea mayor.

Lluís Jofre, profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya, puso como ejemplo el caso de Irlanda, que hace una década, cuando se planteó cómo abordar la sociedad de la información, decidió invertir en infraestructuras. Y propuso una aproximación dual al problema, con infraestructuras ambiciosas y decidiendo para qué usamos estas infraestructuras.

Pere Alemany, director general de AGGAROS, expuso su percepción del concepto de fractura digital, entendida como las diferentes formas de acceder a las redes y no como tener acceso o no tenerlo.

Miquel Barceló, presidente de 22@, preguntó en qué medida podría beneficiar un acuerdo entre el sector público y el privado. En este sentido, Pericàs insistió en que la Administración debe seguir haciendo sus tres roles habituales: regular, subvencionar a los agentes privados e invertir, requisito indispensable para anticiparse al futuro.

EL ROL DE LAS OPERADORAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL LIBRE MERCADO: INNOVACIÓN Y OFERTA

La tercera sesión de la jornada abordó "el rol de las operadoras y de la administración en el libre mercado: innovación y oferta". Participaron Rafael Díez Vega, director general de estrategia y relaciones institucionales de Telefónica de España; José López-Tafall, director de relaciones institucionales de ONO y Pedro Mier, director general de Mier Comunicaciones, moderados por Jordi Gual, profesor de IESE y subdirector general de "la Caixa".

Rafael Díez Vega, director general de estrategia y relaciones institucionales de Telefónica de España, comentó que "el título de esta mesa redonda no tendría sentido si tras 8 años de liberalización no nos encontrásemos ante un sector con características muy particulares". Actualmente, explicó las funciones de la Administración se centran en dos aspectos: regular y supervisar el desarrollo de competencia en el sector, y fomentar e impulsar la adopción de las nuevas tecnologías. Los agentes de mercado, por su parte, deben atender la demanda, desarrollar el negocio, invertir en infraestructuras e innovar en la oferta. Los usuarios deben tomar la iniciativa en la demanda de sus propias necesidades tecnológicas.

Para conocer cuál es la situación actual del sector de las comunicaciones electrónicas y de la sociedad de la información en España, Díez Vega tomó como principal indicativo la situación del mercado de banda ancha, analizándolo tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda.



© Gabriel Cazado

De izquierda a derecha, Díez-Vega, Gual, López-Tafall y Mier.

La cobertura nacional de la oferta de banda ancha llega al 95% de los hogares españoles. El 63% de los hogares puede elegir entre al menos dos operadores de infraestructura, porcentaje que

aumenta hasta el 95% en las zonas donde la relación de coste de despliegue y demanda potencial es más favorable.

Si se analiza la penetración de banda ancha por población, España aparece a la cola de los países europeos, muy por detrás de Portugal, Alemania, Austria, Francia y Reino Unido. Sin embargo, explicó Díez Vega, tiene más sentido analizar la penetración por hogares, y entonces la situación no es tan desfavorable y España aparece por delante de Alemania, Italia, Irlanda y Grecia. Y si se estudia el número de hogares con banda ancha sobre el de hogares con Internet, España aparece a la cabeza, por delante de países como Francia, Reino Unido o Alemania.

Díez Vega coincidió con Faura en que la falta de percepción de utilidad constituye la principal barrera para el desarrollo de la banda ancha. El 37% de hogares españoles no dispone de conexión a Internet o, si la tienen, es de banda estrecha, y el 32 % de las microempresas catalanas no percibe la aplicabilidad de la banda ancha en su negocio. Por tanto, los agentes del mercado se enfrentan a un doble reto: la escasa percepción de utilidad de banda ancha para una gran parte de la población y la creciente demanda de nuevas prestaciones por parte de los usuarios, con dudosa predisposición a pagar más por ellas. Es por tanto necesario renovar o crear nuevas infraestructuras.

En este escenario resulta indispensable, explicó, redefinir las funciones de las Administraciones, que deben reorientarse a superar las barreras que alimentan la brecha digital en España y eliminar los frenos para el despliegue de nuevas infraestructuras y para la innovación. Ahora que se está debatiendo el marco regulatorio, es importante que esta regulación no incorpore riesgos adicionales, como la incertidumbre del marco, y que sea progresivamente abierta. Y que se apueste, además, por la desregulación para permitir un avance del desarrollo.

José López-Tafall, director de relaciones institucionales de ONO, comenzó su exposición refiriéndose al proceso de liberalización, que se inició en 1998, y que tenía tres objetivos: promover la competencia, contribuir al desarrollo del mercado internacional y salvaguardar los intereses de los ciudadanos de la Unión. En paralelo a un objetivo estratégico: situar Europa al mismo nivel que Estados Unidos y Asia en el liderazgo de los nuevos negocios. Para ello, se establecieron distintos instrumentos: un marco regulador común y unos programas de apoyo. Existen, por tanto, múltiples recursos, pero es necesaria la cooperación entre el sector público y el sector privado para conciliar los intereses.

La evolución del sector en España ha sido positiva, aunque a veces no se perciba así. De hecho, las líneas de banda ancha se han multiplicado por tres en tres años, según datos del informe anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 2006. Para garantizar el despliegue de red de banda ancha y la convergencia digital, ONO propone fomentar la coordinación de acciones; garantizar la coherencia regulatoria y una estabilidad; maximizar la libertad de iniciativa y no obviar la política de oferta al impulsar la sociedad de la información.

La acción pública "debe reforzar, que no sustituir, la acción privada", señaló López-Tafall, y para esto es clave incentivar el uso y facilitar el despliegue de nuevas redes.

Pedro Mier, director general de Mier Comunicaciones, presentó el punto de vista industrial y señaló que las políticas de telecomunicaciones deben hacerse para la sociedad. Añadió que hay

que apoyar a los operadores con redes propias pero también hay que exigirles que participen en la cadena de valor.

A la pregunta de si es posible una industria de telecomunicaciones en Cataluña potente sin aliados públicos, Mier fue tajante al asegurar que no. Porque para ello, añadió, se ha de tener complicidad con los actores y tener en cuenta los intereses industriales. Como ejemplo, puso a Corea, que está adoptando una estrategia de país, por eso lidera todas las estadísticas.

Para lograr esto, añadió, desde la Administración deben fijarse objetivos industriales a largo plazo, establecer alianzas tácitas, trabajar por crear las condiciones adecuadas para que el sector industrial pueda desarrollarse, mantener el rumbo pese a las dificultades y ser transparentes con los agentes del sector.

Ante el apunte de Gual de que estamos convergiendo hacia la idea de que es mejor la competencia entre redes, Díez Vega explicó que la situación actual no fomenta la inversión en infraestructuras, puesto que quien invierte en mejoras luego ha de poner esta red al servicio del resto, situación que en Estados Unidos no se produce, gracias a la neutralidad de red.

EL PAPEL DEL REGULADOR EN EL ÁMBITO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En la sesión de clausura, Reinaldo Rodríguez, presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) habló sobre "el papel del regulador en el ámbito de las telecomunicaciones". También participaron Josep Morell, comisionado para la Innovación, las TIC y la Sociedad de la Información de la Cambra de Comerç de Barcelona, y Xavier Vives, director académico del Centro Sector Público-Sector Privado.

Josep Morell, de la Cambra de Comerç de Barcelona, destacó el papel de la Cambra de Comerç en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones e insistió en que la economía es imposible sin ciertos reguladores que velen por el buen funcionamiento. Añadió que la concepción de ciudadanía, empresas y agentes en el sector varía dependiendo del modelo de sociedad que haya, pero que "lo que hay que tener claro es qué vamos a hacer, cuál es el plan a corto, medio y largo plazo".



© Gabriel Cazado



© Gabriel Cazado

Xavier Vives, director académico del Centro SP-SP, inició su intervención recordando que si hablamos de reguladores es porque el sector se ha liberalizado, y lo ha hecho porque se ha demostrado que la competencia mejora la eficiencia. La cuestión es, se preguntó Vives, si el mejor regulador es aquél que acaba desapareciendo. Hasta ahora, el regulador ha tenido un papel de defensa de los consumidores y el gran reto es consolidar su independencia tanto de las empresas como del gobierno. Para acabar, apuntó dos elementos de reflexión: la baja competencia existente en el sector servicios, potencial demandante de las TIC, y el liderazgo ha de asumir la Administración, que debería fomentar la inversión en infraestructuras.

Reinaldo Rodríguez, presidente de la CMT, comenzó explicando que las infraestructuras en red tienden a oligopolios, por lo que la regulación es necesaria. Las funciones del regulador deben ser promover la competencia y las inversiones, tanto a corto como a largo plazo.

El sistema marco actual, el llamado "Nuevo marco europeo de las comunicaciones electrónicas", que "ya no es tan nuevo", apuntó Rodríguez, sigue teniendo como base una filosofía de política de competencia. En la práctica, explicó, "se pide a los reguladores que establezcan las reglas del juego, cuando éstos sólo deberían aplicarlas".

El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones criticó que hasta ahora las políticas de legislación de regulación de telecomunicaciones se han basado en la teoría, cuando deberían basarse en la realidad y teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad. Además, añadió, deberían tener una capacidad de adaptación rápida, puesto que la situación no es la misma hoy que en el 2010, especialmente en el sector tan cambiante como el de telecomunicaciones. Rodríguez explicó que actualmente tenemos problemas de retraso, de concepto y de desigualdad en el nivel de desarrollo de los diferentes miembros de la Unión Europea.



© Gabriel Cazado

Rodríguez se refirió a la Ley de Moore, que vaticina que el número de transistores por pulgada en circuitos integrados se duplica cada año, y apuntó que si ésta se cumple, estamos ante un cuello de botella a largo plazo. Y en caso de que no se cumpla, hay que invertir en infraestructuras de acceso. Por esta razón es necesario incentivar la inversión en redes y mejoras, una tarea aún pendiente. Puso como ejemplo el caso del Reino Unido, que para hacer atractiva esta inversión apostó por la neutralidad de red, tema muy discutido actualmente en Estados Unidos.

Para acabar, Vives le preguntó hacia dónde va la regulación europea y Rodríguez respondió que considera la propuesta de la Unión Europea muy continuista, que intenta rectificar las cosas que no han funcionado bien, cuando lo que de verdad hace falta es una propuesta más rupturista. "Sería necesaria una revisión más ambiciosa y acorde con las necesidades", aseguró.